



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho —Lesividad
 Demandante: Colpensiones
 Demandado: Luz Marina Ochoa Londoño
 Radicación: 15001 3333 004 **2018 00223 00**

1. ASUNTO

Una vez surtido el trámite previsto en el artículo 233 del CPACA, el Despacho procede a resolver la medida cautelar de suspensión provisional de las Resoluciones Nros. GNR 155270 de 27 de junio de 2013 y GNR 320861 de 26 de noviembre de 2013, proferidas por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

2. ANTECEDENTES¹

La entidad demandante expuso los siguientes hechos:

Que la señora Luz Marina Ochoa Londoño nació el 21 de noviembre de 1955, y que a 1.º de abril de 1994 contaba con 13 años, 2 meses y 22 días de cotizaciones.

Que el día 29 de marzo de 2010, la señora Ochoa Londoño solicitó el traslado del régimen de ahorro individual al de prima media, trámite que se hizo efectivo el 01 de mayo de ese mismo año.

Que el 17 de abril de 2013, la demandada solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez.

Que mediante Resolución No GNR 155270 de 27 de junio de 2013, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones reconoció una pensión de vejez a la señora Ochoa Londoño, en cuantía inicial de \$1.066.714, de conformidad con lo establecido en la Ley 33 de 1985, cuya efectividad se dejó en suspenso hasta que se aportara el acta de su retiro definitivo del servicio.

Que una vez se efectuó el retiro del servicio, a través de la Resolución No GNR 320861 de 26 de noviembre de 2013, la Administradora Colombiana de Pensiones incluyó la prestación en nómina de pensionados en cuantía de \$ 1.059.143, cuya efectividad se surtió a partir del 01 de agosto de 2013.

¹ Fs. 6-7

Que mediante Resolución No GNR 201190 del 04 de junio de 2014, Colpensiones resolvió el recurso de reposición impetrado por la demandante, y confirmó todas y cada una de las partes contenidas en la Resolución No GNR 320861 de 26 de noviembre de 2013.

Que a través de la Resolución No VPB 11835 de 23 de julio de 2014, Colpensiones resolvió el recurso de apelación interpuesto y ordenó confirmar en todas sus partes el contenido de la Resolución No GNR 320861.

Que mediante Resolución No GNR 381079 de 28 de octubre de 2014, Colpensiones reliquidó la pensión de vejez de la señora Luz Marina Ochoa en cuantía de \$ 1.089.875, a partir del 01 de agosto de 2013.

Que mediante las Resoluciones GNR 138399 de 13 de mayo y VPB de 25 de septiembre, ambas de 2015, Colpensiones resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución GNR 381079, y confirmó en todas sus partes el acto recurrido.

Que por medio de la Resolución GNR 5503 de 22 de febrero de 2016, Colpensiones negó la reliquidación de la pensión de vejez de la demandada, y a través de la Resolución No GNR 144755 de 17 de mayo de 2016, resolvió el recurso de reposición incoado, para lo cual confirmó el contenido del acto objeto de recursos.

Que el 12 de julio de 2016, por medio de comunicación externa No BZ2016_4001120_2 de 12 de julio de 2016, se solicitó a la señora Luz Marina Ochoa Londoño autorización expresa para revocar las Resoluciones números GNR 155270 de 27 de junio y GNR 320861 de 26 de noviembre de 2013.

Que ante la negativa de la demandada de autorizar la revocatoria de las Resoluciones números GNR 155270 de 27 de junio y GNR 320861 de 26 de noviembre de 2013, se dispuso la remisión del expediente a la Gerencia de Defensa Jurídica de Colpensiones para iniciar las acciones legales pertinentes.

3. DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA²

La apoderada de la entidad demandante, junto con el libelo introductorio, presentó solicitud de medida cautelar, consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nros. GNR 155270 de 27 de junio y GNR 320861 de 26 de noviembre de 2013, por medio de los cuales Colpensiones reconoció a la demandada una pensión de vejez e incluyó la prestación en nómina de pensionados a partir del 01 de agosto de 2013.

² Fs. 31 y ss.

La mandataria sostuvo que los actos enjuiciados fueron expedidos con fundamento en la Ley 33 de 1995, sin tener en cuenta que la señora Luz Marina Ochoa Londoño no era beneficiaria del régimen de transición, de manera que dichos actos eran contrarios al ordenamiento jurídico, habida cuenta de que la demandada presentó traslado del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media el 01 de mayo de 2010, sin acreditar los 15 años de servicios necesarios para recuperar el régimen de transición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la medida que para el 01 de abril de 1994 solo contaba con un total de 680 semanas cotizadas, equivalentes a 13 años, 2 meses y 22 días.

Asimismo, señaló que el pago de una prestación generada sin el cumplimiento de los requisitos legales, atentaba contra el principio de estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones establecido en el Acto Legislativo No 001 de 2005, por lo que solicitó decretar la medida cautelar formulada en cuanto la pensión reconocida a la demandada no se ajustaba a derecho.

Pruebas que sustentan la solicitud de medida cautelar

La parte demandante solicitó tener como pruebas las siguientes.

- Copia auténtica de los actos administrativos en medio magnético.
- Certificado de nómina expedido por la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones.

4. OPOSICIÓN³

La parte demandada, a través de curador *ad-litem*, designado para el efecto, solicitó al Despacho negar la medida cautelar deprecada, tendiente a suspender los actos administrativos contenidos en la Resoluciones GNR 155270 de 27 de junio de 2013 y GNR 320861 de 26 de noviembre de 2013, por medio de los cuales Colpensiones reconoció, liquidó y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor de la señora Luz Marina Ochoa Londoño.

Adujo que los argumentos esgrimidos por la Administradora Colombiana de Pensiones contravienen los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad propios de las medidas cautelares, por cuanto la entidad demandante no demostró siquiera en forma sumaria, que la señora Ochoa Londoño efectuó el traslado del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Meda con Prestación Definida.

Precisó que de haber efectuado dicho traslado, la entidad demandante omitió el deber de información que le era exigible, en cuanto la exposición de las consecuencias, beneficios y repercusiones que acarrearía la elección de

³ Fs. 17-18

trasladarse de régimen que, para el caso concreto, se traducirían en la pérdida de beneficios del Régimen de Transición.

En este sentido, indicó que el Decreto 663 de 1993 – Estatuto Orgánico Financiero- incluyó como sociedad de servicios financieros a las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y cesantías, estableciendo el deber de suministrar a sus usuarios la información necesaria para lograr la mayor transparencia en operaciones que realicen.

Señaló que Colpensiones reconoció a la demandada una prestación a la que efectivamente tenía derecho, en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que permitía concluir que la cautela solicitada no encontraba cabida dentro de la apariencia de buen derecho o *fumus boni iuris*, por cuanto al decretarse se desconocería el actual estatus de pensionada de la señora Ochoa Londoño. Adicionalmente, porque acceder a la medida acarrearía graves perjuicios irremediables a la demandada, en cuanto el estatus de pensionada fue adquirido conforme a los lineamientos de legalidad y de buena fe, y porque se presumía que con dicha prestación económica solventaba los gastos que le permiten garantizar su mínimo vital.

5. CONSIDERACIONES

El artículo 238 de la Constitución Política consagra la figura de la suspensión provisional de los actos administrativos, en los siguientes términos:

“Artículo 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”.

Con el objeto de proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, la Ley 1437 de 2011 consagró unas medidas cautelares de orden preventivo, conservativo, anticipativo o de suspensión, que procederán siempre que se cumplan los requisitos de procedencia decantados por la doctrina y la jurisprudencia, esto es, el *fumus bonus iuris* o la apariencia del buen derecho del demandante y el *periculum in mora* o peligro de mora en el logro de la efectividad de la tutela judicial y la ponderación del interés general y el particular, que dé como resultado la mayor afectación del interés general por la no adopción de la medida cautelar.

De otra parte, los requisitos para la procedencia de las medidas, formales y sustanciales, así como el procedimiento para su adopción están consagrados en los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

De conformidad con lo anterior, las medidas cautelares pueden ser decretadas antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, sin que la decisión sobre la medida cautelar implique prejuzgamiento. Igualmente, pueden presentarse sucesivas solicitudes de medida cautelar, siempre que se presenten hechos sobrevinientes (art. 233 inciso 6° Ley 1437 de 2011).

El numeral 3.° del artículo 230 *ibídem* estableció la suspensión provisional como medida cautelar, y el artículo 231 y siguientes las reglas propias de dicha figura jurídica, así:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (...)” (Negritas y subraya fuera del texto original)

Así, para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado establece una diferenciación atendiendo a si en la demanda se pretende únicamente la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe acreditarse la violación de las normas superiores, o si se pretende además de la nulidad el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios además deberán probarse estos.

En este orden, el Código faculta al juez administrativo para que, según la percepción de la violación normativa alegada, pueda: i) realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y ii) estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.

De acuerdo con el Consejo de Estado, es aquí donde radica la innovación en la regulación de la suspensión provisional contenida en el CPACA, al considerar:

*“La Sala recuerda que en el anterior CCA —Decreto 01 de 1984—, artículo 152, la procedencia de esta medida excepcional solicitada y sustentada de modo expreso en la demanda o en escrito separado, estaba sujeta o dependía de que la oposición o la contradicción del acto con las disposiciones invocadas como fundamento de la suspensión provisional fuera **manifiesta**, apreciada por **confrontación directa** con el acto o con documentos públicos aducidos con la solicitud.*

De las expresiones "manifiesta" y "confrontación directa" contenidas en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo anterior, tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia dedujeron que la procedencia de esta figura excluía que el operador judicial pudiera incursionar en análisis o estudio, pues la transgresión por el acto de las normas en que debería fundarse, alegadas como sustento de la procedencia de la suspensión, debía aparecer "prima facie", esto es, sin implicar estudio ni esfuerzo analítico alguno.

Ahora bien, no obstante que la nueva regulación como ya se dijo permite que el juez previo a pronunciarse sobre la suspensión provisional lleve a cabo análisis de la sustentación de la medida y estudie pruebas, ocurre que ante el perentorio señalamiento del 2º inciso del artículo 229 del CPACA (Capítulo XI Medidas Cautelares- procedencia), conforme al cual: "La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento", es preciso entonces que el juez sea muy cauteloso y guarde moderación a fin que el decreto de esta medida cautelar no signifique tomar partido definitivo en el juzgamiento del acto ni prive a la autoridad pública que lo produjo o al demandado (en el caso el elegido o el nombrado cuya designación se acusa), de que ejerzan su derecho de defensa y que para la decisión final se consideren sus argumentos y valoren sus medios de prueba."⁴

Bajo este contexto, el Despacho procederá a estudiar si la solicitud de medida cautelar cumple los requisitos sustanciales y formales exigidos para su decreto.

6. CASO CONCRETO

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado ha señalado que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en tres categorías, a saber: (i) requisitos de procedencia general o común de índole formal, (ii) requisitos de procedencia general o común de índole material, y (iii) requisitos específicos de procedencia.⁵

Así las cosas, el Despacho verificará el cumplimiento de cada uno de los referidos requisitos así:

6.1. Requisitos de procedencia general o común de índole formal

Los requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole formal, corresponden a: (i) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la

⁴ CE. SCA. SV. consejera ponente (E): Susana Buitrago Valencia, Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil doce (2012) Expediente: 11001-03-28-000-2012-00043-00

⁵ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B". Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto de 6 de abril de 2015. Expediente N°: 11001-03-25-000-2014-00942-00. N° interno: 2905-2014.

jurisdicción de lo contencioso administrativo y (ii) debe existir solicitud de parte debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio.

6.1.1. El medio de control ejercido corresponde a un proceso declarativo (art. 229)

La presente demanda tiene por objeto que se declare la nulidad de las Resoluciones Nros. GNR155270 de 27 de junio y GNR 320861 de 26 de noviembre de 2013, expedidas por la Administradora Colombiana de Pensiones, es decir, se trata de un proceso declarativo de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, adelantado ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, en consecuencia, pasible de la medida cautelar de suspensión provisional.

6.1.2. Existe solicitud de parte debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado.

En el presente asunto, la parte demandante presentó en escrito separado la solicitud de medida cautelar de suspensión de los actos administrativos demandados, oportunamente, comoquiera que se efectuó de manera concomitante con la presentación de la demanda.

6.2. Requisitos de procedencia general o común de índole material.

Corresponden a los siguientes: (i) que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia; y (ii) que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

6.2.1. La medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

De acuerdo con la demanda, los actos demandados son ilegales por haber desconocido las normas constitucionales y legales en que debían fundarse, pues la entidad reconoció una pensión de vejez a la señora Luz Marina Ocho Londoño, en virtud de lo establecido en la Ley 33 de 1985, cuando no era beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al no acreditar los 15 años necesarios para recuperar los beneficios del régimen de transición, habida cuenta de que para el 01 de abril de 1994 contaba con 13 años, 2 meses y 22 días, y su traslado del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media se efectuó el 01 de mayo de 2010.

Por consiguiente, como se ha venido pagando una pensión de vejez a la demandada sin el cumplimiento de los requisitos legales, dicha situación atenta contra el principio de estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones establecido en el Acto Legislativo 001 de 2005. Así, la medida de suspensión provisional solicitada guarda plena identidad con el objeto de la Litis y busca garantizar su cumplimiento y evitar los perjuicios que podrían sufrirse mientras se produce la decisión.

6.2.2. La medida cautelar solicitada tiene relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Al respecto, corresponde señalar que la solicitud de medida cautelar se sustenta en el argumento central de la demanda de nulidad contra los actos administrativos demandados, razón por la cual existe plena coincidencia entre lo pretendido en la demanda y el objeto de la medida cautelar.

6.3. Requisitos de procedencia específicos, de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo

En cuanto a los requisitos de procedencia específicos, si se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado se deben tener en cuenta adicionalmente, los siguientes: (i) si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud; y (ii) si la demanda, además de la nulidad del acto administrativo, pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, debe verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas y probarse, al menos sumariamente, la existencia de los perjuicios.

6.2.3. Confrontación de los actos administrativos demandados frente a las normas señaladas como infringidas.

Los actos administrativos cuya suspensión provisional se solicita son las Resoluciones Nos. GNR 155270 de 27 de junio y GNR 320861 de 26 de noviembre de 2013, por medio de los cuales Colpensiones reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a la señora Luz Marina Ochoa Londoño, al considerar que los mismos no se encuentran ajustados a derecho, pues reconocieron una prestación sin que la beneficiaria cumpliera con todos los requisitos legales.

En este orden, para sustentar la suspensión provisional de los referidos actos, Colpensiones argumentó que a la demandada le fue reconocida una pensión de vejez, conforme a las disposiciones de la Ley 33 de 1985, esto es, como

beneficiaria del régimen de transición, situación que no se ajusta a derecho, en la medida que al haberse trasladado del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, desde el 01 de mayo de 2010, la demandada debió acreditar 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sin embargo, para el 01 de abril de 1994 solamente acreditó 13 años, 2 meses y 22 días de cotización al Sistema General de Seguridad Social en pensión, sin cumplir con dicho condicionamiento legal.

Por otra parte, la demandada sostuvo que Colpensiones no demostró siquiera en forma sumaria, que la señora Ochoa Londoño efectuó el traslado del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Adicionalmente, que el estatus de pensionada fue adquirido conforme a los lineamientos de legalidad y de buena fe, por lo que de accederse a la medida cautelar se presume se afectaría su mínimo vital.

Así las cosas, en este caso para determinar la viabilidad de decretar la medida de suspensión pretendida, se analizará el contenido de los actos administrativos acusados, frente a las normas señaladas como infringidas en la solicitud; la jurisprudencia aplicable a la materia, el estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y el traslado de la misma, a fin de concluir si surge la contradicción alegada, tal y como lo dispone el artículo 231 del CPACA.

Las normas que se señalan como infringidas en la solicitud de la medida, son las siguientes:

- i) Constitución Política
- ii) Ley 100 de 1993
- iii) Ley 1437 de 2011

En este orden, Colpensiones señaló que conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el régimen de transición se estableció para aquellas personas que al momento de entrar en vigencia dicha norma, tuvieran 35 años o más de edad, si son mujeres o cuarenta (40) o más años si son hombres, o en su defecto 15 años de servicio, indicando que dicha prerrogativa no era aplicable cuando estas personas voluntariamente se acogieron al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o para quienes habiendo escogido el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad decidieron cambiarse al de Prima Media con Prestación Definida.

Precisó que cuando ocurría un traslado de régimen, y si el afiliado quería recuperar su régimen anterior, debían cumplirse unos requisitos al momento de su traslado, estos son: rentabilidad y 15 años cotizados al 1.º de abril de 1994, conforme a lo señalado en la Sentencia de Unificación 856 de 2013.

De igual manera, sostuvo que la Corte Constitucional en Sentencias C-789 de 2002 y SU 062 de 2010, en concordancia con el Decreto 692 de 1994 y el Decreto 3995 de 2008, señaló que las personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (01 de abril de 1994) ostentaban 15 años de servicio y/o cotizaciones, conservarán el régimen de transición en caso de traslado de Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Ahora bien, en el expediente obran los actos administrativos demandados, Resolución No GNR 155270 de 27 de junio de 2013 y GNR 320861 del 26 de noviembre de 2013 (fs.6ª y 45 a 50), de los que es posible extraer de su parte motiva las siguientes circunstancias:

- Que la señora Luz Marina Ochoa Londoño nació el 21 de noviembre de 1955.
- Que al momento de efectuar la solicitud de reconocimiento de su pensión de vejez, la demandada acreditó un total de 1.621 semanas cotizadas.
- Que en aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se reconoció una pensión de vejez a la demandada, conforme a los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio.
- Que se ordenó el pago de una mesada pensional a la demandada por valor de \$1.059.143, a partir del 01 de agosto de 2013.
- Que el pago de las mesadas y el retroactivo correspondiente se efectuó con la nómina del período de diciembre de 2013.

De igual manera, obran en el expediente los siguientes documentos que fueron aportados en medio magnético a folio 6A:

- Copia del formulario de vinculación o actualización al Sistema General de Pensiones de la demandada al Seguro Social- Pensiones, sin que se vislumbre fecha de su diligenciamiento o recepción.
- Copia de la declaración de no pensión de la demandada, sin fecha de diligenciamiento o radicación.
- Certificación de períodos de vinculación para pensiones y bonos pensionales, en el que se registra como fecha de vinculación laboral el 10 de enero de 1981, en el cargo de auxiliar de enfermería de la ESE Hospital J.C.V

- Constancia de ejecutoria de las Resolución No 155270.
- Certificación de salario mes a mes formato para liquidar pensiones del Régimen de Prima Media.
- Formato de solicitud de prestaciones económicas de Colpensiones, suscrito por la demandada, radicado el 27 de abril de 2013 en la Seccional de La Dorada Caldas.
- Copia de la cédula de ciudadanía de la demandada.
- Copia del registro civil de la demandada.
- Certificación laboral de 08 de abril de 2013, expedida por el subgerente administrativo de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez, en la que se indica que la demandada labora en dicha institución desde el 10 de enero de 1981.
- Certificación de salario base (formato 2) para la liquidación y emisión de bonos pensionales.
- Comunicación de 12 de julio de 2016, suscrita por el gerente nacional de reconocimiento pensional de Colpensiones, a través de la cual se solicita autorización expresa a la demandada para revocar los actos administrativos demandados.
- Formato de Colpensiones sobre información de EPS de la demandada.
- Certificado de devengados y deducidos de la demandada del período comprendido entre noviembre de 2014 a noviembre de 2017, con un valor neto girado de \$36.354.982.

Precisado lo anterior, al realizar una confrontación entre las normas señalas como violadas y el acto administrativo, el Despacho encuentra que, hasta este momento, con las pruebas obrantes en el expediente no puede dilucidarse la violación a las normas invocadas como infringidas, comoquiera que ninguna de dichas pruebas permite definir la fecha exacta en la cual la señora Luz Marina Ochoa Londoño realizó su traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, tal como lo señala la entidad demandante, circunstancia que debe ser probada y que resulta de crucial importancia para determinar la prosperidad de la solicitud de medida cautelar.

Por lo tanto, resulta necesario agotar las demás etapas del proceso a fin de resolver de manera clara y de fondo los problemas jurídicos que surjan de la fijación del litigio, así como de la valoración de las pruebas que se llegaren a decretar, de manera que sea posible establecer si los actos enjuiciados trasgreden las normas constitucionales y legales.

Asimismo, es necesario precisar que con el presente proveído no se está dotando de legalidad el acto acusado, solamente que con las pruebas que se tienen hasta el momento, no se cumplen los requisitos necesarios para ordenar la suspensión provisional mediante el decreto de una medida cautelar, razón por la cual corresponderá en sentencia de primera instancia establecer, previo al agotamiento de las etapas propias de un proceso ordinario administrativo, si en el asunto *sub-examine* el acto administrativo debe ser declarado nulo.

Debe resaltarse que la confrontación de los actos demandados con las normas superiores invocadas como violadas y las pruebas allegadas, deben ofrecer al juez un **alto grado de certeza** sobre la vulneración del ordenamiento jurídico, en tanto, “la duda razonable” cuando se evidencian motivos que impidan tener una fuerte convicción sobre la ilegalidad del acto, se constituye en un argumento válido y suficiente para negarla.

Así las cosas, al analizar el contenido de las Resoluciones números GNR 155270 de 27 de junio y GNR 320861 de 26 de noviembre, ambas de 2013, a la luz de las normas invocadas como violadas, de acuerdo con el contenido de las pruebas allegadas, para el Despacho **no resulta claro que en este momento del trámite procesal** se vislumbre una violación o transgresión del ordenamiento jurídico.

6.2.4. Deben probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios alegados.

Conforme los argumentos esbozados por Colpensiones, el Despacho no puede concluir la existencia de un perjuicio irremediable que afecte la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, como consecuencia del reconocimiento pensional efectuado a favor de la demandada, comoquiera que ninguna de las pruebas analizadas permite predicar su configuración, y que la solicitud de medida cautelar se limitó a enunciar que con el pago las mesadas pensionales de la demandada se afecta el flujo permanente de recursos que permiten el funcionamiento del sistema, sin que demostrara al menos de manera sumaria dicho detrimento.

Por el contrario, a juicio del Despacho, al ponderar los intereses de los sujetos procesales, puede inferirse de manera razonada que el decreto de la medida cautelar resultaría más gravoso para la demandada, toda vez que se trata de una

señora de 63 años⁶, cuya única fuente de ingreso, se presume, es la pensión que viene percibiendo de buena fe, desde el 01 de agosto de 2013, y porque sus posibilidades de emplearse se ven disminuidas.

En todo caso, en virtud de las particularidades de este asunto, máxime que se encuentra en discusión el régimen aplicable a la situación pensional de la demandada, se tiene que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados pueden afectar los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, por cuanto la exclusión de nómina de pensionados de quien se le ha reconocido pensión de vejez contraría la garantía en la permanencia de la remuneración y acceso a las necesidades básicas propias y de su familia.⁷

De igual manera, en este punto es importante resaltar que resulta inequitativo para el ciudadano que ha percibido su mesada pensional de buena fe, asumir los yerros en los que posiblemente incurrió la parte demandante, al momento de reconocer su pensión de vejez, habida cuenta de que la Administradora Colombiana de Pensiones es la entidad responsable de determinar el régimen y la normatividad aplicable para cada caso en concreto.

En suma, ante la duda razonable que impide al Despacho evidenciar una violación flagrante del ordenamiento jurídico en este momento procesal, y la falta de prueba que acredite el perjuicio irremediable esbozado por Colpensiones, el Despacho dispondrá negar la solicitud de suspensión de los actos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- Negar la suspensión provisional de las Resoluciones números GNR 155270 de 27 de junio de 2013 y GNR 320861 de 26 de noviembre de 2013, según las razones expuestas en esta providencia.

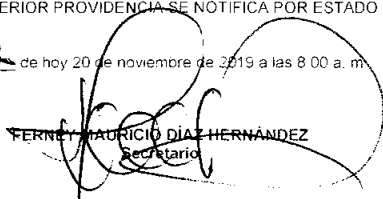
Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

⁶ Por cuanto, nació el 21 de noviembre de 1955, conforme a la información que obra en el expediente administrativo medio magnético CD f. 59

⁷ Consejo de Estado. Sentencia de 13 de junio de 2019. Acción de Tutela radicación No 11001-03-15-000-2019-01712-00(AC). M.P Rocio Araujo Oñate.

⁸ AMRS

<p>JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA</p> <p>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO</p> <p>N° <u>2</u> de hoy 20 de noviembre de 2019 a las 8 00 a. m.</p> <p> FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ Secretario</p>

⁸ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 20 de noviembre de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co.
Ferney Mauricio Díaz Hernández– Secretario